

Recurso nº 73/2020

Acuerdo de 12 de marzo de 2020, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, sobre medidas provisionales en el expediente de contratación del contrato de servicios denominado “Mantenimiento integral de equipamiento de radiodiagnóstico para la Unidad Central de Radiodiagnóstico”, número de expediente A/SER-032373/2019.

Con fecha 10 de marzo de 2020, se ha recibido en este Tribunal escrito de la representación de la entidad APR 1998, S.L. (en adelante APR) contra los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato de servicios de referencia, publicados junto con el anuncio de licitación en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid el 18 de febrero de 2020. La recurrente solicita la anulación de los pliegos por no ser conformes a Derecho. Asimismo solicita la medida cautelar consistente en la suspensión del procedimiento de licitación del contrato de servicios impugnado, indicando que, en caso de continuar su tramitación, se perdería la finalidad legítima del recurso, toda vez que se obligaría a la presentación de ofertas conforme a las condiciones actuales establecidas en los pliegos, deviniendo inútiles las ofertas, si son anulados, dado el alcance y extensión de los motivos de impugnación alegados, que afectan a cuestiones clave de la licitación (los requisitos de solvencia, la clasificación, los criterios de adjudicación, la división en lotes, el umbral de anormalidad, etc.). Además indica que de ello se derivan costes económicos (preparación y presentación de ofertas y, en su caso, impugnación de la adjudicación, asesoramiento jurídico), materiales e incluso morales (tiempo, dedicación, esfuerzo, etc.), frente al interés público que no se vería afectado, ya que un retraso no afectaría en absoluto a la prestación del servicio, el cual sigue atendido por la anterior empresa adjudicataria (APR), ni los intereses de terceras empresas licitadoras, ya que el futuro contrato tendrá el mismo plazo de duración.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0964290830304151029598**

El artículo 51.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), establece que en el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamenta el recurso, los medios de prueba de que pretende valerse el recurrente y en su caso las medidas de naturaleza cautelar cuya adopción solicite.

La suspensión automática del expediente de contratación en fase de adjudicación, tiene por objeto evitar que con la formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los interesados afectados, tal y como aparece configurada ya en el artículo 2.3 de la Directiva 89/665/CE (redacción actual dada por la Directiva 2007/66/CE), que dispone la suspensión del procedimiento como garantía de que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato cuando el recurso se plantee contra la decisión de adjudicación de un contrato *“Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso”*.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto



impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.

Por otro lado el recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato.

Esta misma argumentación relativa a la fase de adjudicación, nos sirve también para justificar la adopción de medidas cautelares en supuestos en que, como en el presente, no se impugna la resolución de adjudicación, sino algún otro de los actos objeto del recurso, como son los pliegos que rigen el procedimiento de contratación impugnado, este Tribunal estima conveniente decidir sobre el fondo del asunto con anterioridad a que se proceda a la apertura de las ofertas presentadas a la convocatoria recurrida, considerando que en atención a los breves plazos de resolución del recurso es difícil que se vayan a producir apreciables perjuicios económicos o de salud pública.

El recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar, y con la suspensión de la tramitación del expediente de contratación en este supuesto se trata de evitar la posibilidad de causar perjuicios a los interesados afectados y, que, en su caso, se facilite la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la posible infracción.

De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la LCSP, este Tribunal por unanimidad:

ACUERDA



Suspender la tramitación del procedimiento de adjudicación de la contratación del servicio de “Mantenimiento integral de equipamiento de radiodiagnóstico para la Unidad Central de Radiodiagnóstico”, número de expediente A/SER-032373/2019, hasta que se resuelva el recurso y se acuerde expresamente el levantamiento de la suspensión.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0964290830304151029598**